

CAPÍTULO V

LA SOCIEDAD QUE SE DESINTEGRA

Para fines de la década de 1970, toda una época, quizás incluso la propia modernidad, parecía estar llegando a su fin. Cada vez quedaba más claro que se estaban produciendo cambios fundamentales en el desarrollo del capitalismo. Desde mediados del siglo XIX en adelante, se había considerado que, a pesar de las frecuentes recesiones económicas, la masiva pobreza, la desigualdad social, la guerra y la violencia, el capitalismo actuaba como la fuerza de consolidación social. Sostenía la difusión de las ideas de la Ilustración, la libertad individual y los derechos humanos; creaba las condiciones en las cuales las masas podían demandar la inclusión en esos derechos, edificaba ciudades y comunidades estables; y creaba las condiciones para el surgimiento de formas de integración que reducían el conflicto social y político a un mínimo compatible con la supervivencia del sistema. Inclusive si esa estabilidad eventualmente hubiese requerido la creciente intervención estatal —una transición a la modernidad organizada del Estado de bienestar keynesiano— el capital habría sido capaz de sostenerla. Más precisamente, consolidó las relaciones sociales del control del delito como el mecanismo para la gobernancia de una amplia variedad de conflictos y daños.

Éste ya no es más el caso. Está bastante claro que en los primeros años del siglo XXI la dirección del desarrollo se ha alterado fundamentalmente. Las tendencias hacia la cohesión social, la integración y la homogeneización cultural son ahora desplazadas por contratendencias hacia la fragmentación social y la polarización, la desigualdad, la pluralización y la diversificación. A una escala mayor, la modernización como proceso de asimilación global a la estructura social de los países capitalistas avanzados, a lo sumo una débil tendencia, ha sido desplazada por la acentuación de las diferencias y las desigualdades entre los Estados y las regiones. Estas tendencias eran discernibles, tal como he apuntado, incluso durante el apogeo del Estado de bienestar keynesiano, pero ahora están ascendiendo, definiendo el carácter del sistema.

En resumen, estamos en la nebulosa de lo que Peter Wagner (1994) denominó la *segunda* crisis de la modernidad –la primera fue la crisis que dio lugar al Estado de bienestar keynesiano–, donde las estructuras de la modernidad organizada se disipan a favor de la declinación de la economía de producción masiva del fordismo, al debilitamiento del Estado-nación bajo el impacto de la globalización, a la pluralización y fragmentación de las identidades y los valores sociales, y a la caída de la *privatización* cívica y las restricciones a la conducta individual.

LA REPRODUCCIÓN DESTRUCTIVA

La modificada dinámica del desarrollo capitalista ha sido articulada por István Mészáros (1995) en los siguientes términos. Durante el siglo XIX, cuando Marx producía su clásico análisis del capitalismo, la economía periódica y las crisis sociales se manifestaban como “grandes tormentas” (Marx, 1973, p. 411). Estas disrupciones *episódicas*, severas, no interferían con “la articulación social predominantemente productiva del capital en los tiempos de Marx” (Mészáros, 1995, p. 559). En el capitalismo de hoy en día la crisis y la dislocación se manifiestan en una variedad de mo-

dos, como un rasgo permanente del sistema, más que como un repentino episodio de disrupción cíclica. Las crisis se “difunden, tanto en el sentido *temporal*, como en relación con su *ubicación estructural*”. Lo que tenemos ahora es más bien un “continuo deprimido, que exhibe las características de una crisis *crónica* y más o menos *permanente, endémica y acumulativa*, con las perspectivas finales de una *crisis estructural* que se profundiza constantemente” (Mészáros, 1995, pp. 597-598).

Este continuo deprimido combina la intensificación de los síntomas clásicos de la crisis, tales como la tasa descendente de ganancias (Brenner, 1998, 2000) y la sobrecapacidad industrial masiva en relación con las oportunidades de beneficios (Greider, 1997), con la firme destrucción de la infraestructura social y económica, y también del entorno físico. El ascendente desempleo estructural, que alcanza niveles de pobreza global, con salarios por debajo de los niveles de pobreza; la creciente producción de contaminación ambiental y de desperdicios, y la generación de una enorme cantidad de fondos de “capital ficticio” que, incapaz de generar inversiones lucrativas en la producción de mercancías y en el empleo estable del trabajo, despliega métodos puramente monetarios de obtención de ganancias, tal como la especulación con divisas y en los mercados de valores; características cada vez más prominentes.¹

La combinación de una intensificada competencia por salidas redituables en los mercados globales con el predominio de los capitales financieros especulativos, produce una creciente orientación hacia la rentabilidad a corto plazo y la inseguridad de empleo en un régimen dominado por lo que el economista estadounidense Bennet Harrison ha denominado “capital impacien-

¹ La transición de los fondos, desde la inversión productiva a la especulación financiera, ha sido dramática en los años recientes. En 1979, el 30% de las transacciones globales extranjeras de intercambio se computaban en el comercio de bienes y servicios. Para 1995, esto sólo representaba el 1.5% (Khor, 1997; ver también Kennedy, 1998).

te" (Harrison, 1994; ver también Sennett, 1998, pp. 22-23). Este régimen contrasta con la estabilidad económica y la predictibilidad a largo plazo del periodo keynesiano de la postguerra. La localización estructural de la crisis se difunde a esferas más amplias, que incluyen la desorganización de la estructura social, la desaparición de las comunidades, el debilitamiento del Estado y la política como mecanismos gobernantes, de la cultura y el espectro completo de la organización de la vida urbana. El capitalismo como sistema mundial se caracteriza ahora por la creciente inestabilidad, la incertidumbre y el riesgo. El capitalismo está ahora derribando las viejas estructuras de la modernidad organizada que alguna vez sostuvo.

La raíz de esto yace en la transformada relación entre el capital y el trabajo. El capital está renunciando cada vez más a la dependencia sobre la clase trabajadora compuesta de los trabajadores fordistas *blue collar*,² de trabajos estables con altos salarios y un vasto asalariado *white collar* de "hombres de la organización". La fuerza conductora de este cambio es el impulso para retener la rentabilidad de una creciente masa de capital. Sin embargo, la

² *Blue collar* (cuello azul) y *white collar* (cuello blanco) constituyeron, en términos sociológicos, expresiones destinadas a poner de manifiesto las diferentes vestimentas utilizadas, respectivamente, por los empleados y los trabajadores. En el contexto cultural en que surgió la sociología industrial los empleados eran los trabajadores no manuales (*white collar*) y los trabajadores propiamente dichos los manuales (*blue collar*). La expresión "cuello blanco" alcanzó más éxito: en algunas ocasiones esta expresión se refiere únicamente a los trabajadores no manuales de menor rango (empleados de comercio o técnicos sin posición directiva); también puede expresar más ampliamente a todos los que integran el mundo empresarial sin ser trabajadores manuales; en otras oportunidades designa a todos los integrantes de la clase media. Con la difusión del modelo de ascenso social estadounidense (y el lenguaje sociológico que le era propio) pasó a designarse con esa expresión a distintas manifestaciones de la cultura de clase media. Entre otras manifestaciones, es conocida la de un tipo de criminalidad: "delitos de cuello blanco". El primero que afirma con éxito esta denominación en 1940, Edwin Sutherland, sostiene que es "el delito de la clase cuello blanco o elevada, compuesta por profesionales u hombres de negocios respetables o al menos respetados". [N. del t.]

rentabilidad no sólo puede soportar cada vez menos a una clase trabajadora fuerte, estable y bien pagada, con la que tiene que comprometerse social y políticamente, sino que, y de forma más importante, la necesita cada vez menos. En consecuencia, el capital está perdiendo interés en las instituciones modernas de compromiso político con estos estratos y con altos niveles de asistencialismo y derechos de ciudadanía diseñados para asegurar su reproducción y mejorar los conflictos de clase.

LA FRAGMENTACIÓN SOCIAL

Como el capital no puede en definitiva prescindir del trabajo como la fuerza de rédito sobre el primero, la relación entre estas dos grandes clases asume formas progresivamente desconectadas. En el sector cada vez más importante del capital financiero –del capital monetario que intenta agrandarse directamente a través de los medios especulativos, sin la mediación de la producción de bienes reales–, la relación del capital con el trabajo es, en todo caso, indirecta. Pero también en las manufacturas, el impacto de la tecnología de ahorro de mano de obra y las comunicaciones globales se proponen permitir la recomposición de la producción capitalista, así como de la clase obrera. Con rediseñados procesos laborales que resaltan la mano de obra no calificada y barata, el capital puede sustituir la movilidad global en busca de nuevas fuentes de trabajo para invertir en la socialización y la integración de la clase obrera característica del periodo keynesiano. La creciente movilidad de las operaciones implica que la mayoría de las corporaciones poderosas son capaces de, bajo la amenaza de trasladarse a otros lugares, asegurarse importantes reducciones en los impuestos destinados a los derechos del asistencialismo y la educación de esa fuerza laboral (Martin y Schumann, 1997, pp. 200-206; Hertz, 2001). Los costos de socialización y reproducción se pueden remitir a la clase obrera, en un proceso que de manera creciente iguala las condiciones laborales en el Tercer Mundo y

los países capitalistas avanzados. Esta nueva relación entre capital y trabajo fue expresada por el sociólogo español Manuel Castells, como una en que

el trabajo y el capital cada vez más tienden a existir en diferentes espacios y tiempos: el espacio de los flujos y el espacio de los lugares... De este modo, cada uno vive del otro, pero no se relacionan entre ellos... las relaciones sociales de producción se han desconectado de su existencia real. El capital tiende a escaparse en su hiperespacio de circulación pura, en tanto que el trabajo disuelve su entidad colectiva en una infinita variedad de instancias individuales... el capital se coordina globalmente, el trabajo se individualiza (Castells, 1996, pp. 475-476).

De este modo, la acumulación de capital ya no sostiene más a la cohesión e integración sociales; en cambio, produce polarización y fragmentación. A la larga, la tendencia es hacia una polarización entre los muy ricos y los muy pobres (Sassen, 1991). Este proceso presenta dimensiones sociales, políticas y espaciales. Las dinámicas sociales de fragmentación son bien conocidas. En un extremo de la estructura social se encuentran los números en expansión de los muy ricos, los dueños y administradores del capital, en especial del capital financiero, que se ha convertido en el sector predominante de la clase capitalista (Sampson, 1995, p. 151). Estos altos gerentes y ejecutivos se están transformando en una clase global, ya no más atada a ninguna sociedad en particular. Por debajo de ellos, las profesiones de apoyo, como los abogados, los contadores, los gerentes de sistemas, los trabajadores con conocimientos técnicos, los trabajadores de los "servicios de información" y los gerentes de bajo nivel, combinan altos salarios con largas jornadas e inseguridad laboral (Reich, 1992). En el otro extremo de la estructura social, estamos siendo testigos, como lo expresa Ulrich Beck, "del desacople del crecimiento económico y de las ganancias corporativas, a partir de mejores condiciones de vida y laborales para los empleados" (Beck, 2000, p. 97). Los sectores con más rápido crecimiento de los empleos de la clase trabajadora cuentan ahora con bajos salarios, dedicación de me-

dio tiempo y empleo temporal, especialmente en el área de servicios (Gray, 1995). Estos puestos de trabajo, representados por el empleo en áreas tales como la de la industria de la comida rápida, ya no constituyen más un medio para escapar de la pobreza y son vulnerables a ser reemplazados por la automatización o la oferta de mano de obra incluso más barata de lugares hacia donde la producción se puede trasladar fácilmente. Por supuesto, las grandes fábricas permanecen, pero sus condiciones laborales están menos preocupadas por las condiciones de trabajo negociadas que caracterizaban al fordismo, y más por las condiciones del Tercer Mundo, con largas jornadas, bajos salarios y una mano de obra reemplazable y condescendiente (Head, 1996). En el mero fondo de la estructura social, un gran número de personas se encuentran virtualmente fuera del mercado laboral legal y, concentradas en guetos, barrios superpoblados y decadentes zonas industriales antiguas, funcionan como oferta laboral para una creciente, informal y sombría economía de actividades libres de impuestos y criminalizadas.

Esta polarización se refleja en la creciente desigualdad de ingresos en la mayoría de las sociedades capitalistas, sobre las cuales los descendentes niveles de servicios asistenciales tienen un declinante efecto reparador. Recientes estudios en el Reino Unido, tales como los de la *Commission on Social Justice* (1994) y el de la *Fundación Joseph Rowntree* (Barclay, 1995; Hills, 1995), demostraron que el 10% inferior de la población no pudo participar en absoluto en la expansión económica de la década y hasta mediados de los años de 1990, y que las diferencias de clase en lo relativo a salud y expectativa de vida se están ensanchando firmemente. La participación del ingreso total (deducidos los gastos de alojamiento) del 10% más pobre de la población cayó de un 4% en 1972, hasta un 2% en 1991/2, en tanto que para el 10% más rico, esos porcentajes se elevaron de un 20.9% hasta un 27%, durante el mismo periodo (Hills, 1995, p. 25). Esta tendencia ha continuado en los años recientes (Harris, 2000). La creciente desigualdad ha sido particularmente aguda en los Estados Unidos, donde el

porcentaje de participación de la quinta parte más pobre de la población en el conjunto de ingresos familiares cayó de un 4.3% en 1974, hasta un 3.6% en 1994; en tanto que la participación del quinto más rico ascendió de un 16.5% hasta un 21.2%, en el mismo periodo (*US Census Bureau*, 2000; ver también Freeman, 1996).

La desigualdad social no es en sí misma una señal de fragmentación social. Las comunidades pobres pueden ser cohesivas y los ricos pueden permanecer sensibles a la necesidad de asegurar la estabilidad social y la integración generales, a través de una medida de redistribución de la riqueza y de reparto de ciertos derechos entre la ciudadanía social. Lo que representa la nueva desigualdad es una creciente brecha entre las oportunidades de vida de los ricos y los pobres, aumentando la fragmentación dentro de las clases sociales, además de producir un descenso de comunicación entre ellas y el abandono de la preocupación efectiva por la integración social.

La fragmentación de las comunidades obreras proviene del descenso del empleo sostenido y de los correspondientes niveles de salarios. La falta de trabajo debilita a la familia; cada vez se forman menos familias de dos padres (madre y padre), porque las parejas jóvenes encuentran que los costos de la nueva distribución del mercado de la vivienda son imposibles, y las mujeres jóvenes están menos inclinadas a casarse con hombres sin perspectivas laborales (Wilson, 1987, 1993). Las familias existentes se hacen cada vez más dependientes del papel dual de las mujeres, como asalariadas y como amas de casa, lo que conduce a crecientes conflictos, violencia doméstica y ruptura familiar (Campbell, 1993). Aumenta la proporción de madres solteras; además, se ven beneficiadas de la caída de la condición desviada de la monoparentalidad, un cambio que caracteriza la vida de todas las clases, como la descomposición del *orden de género* de la modernidad (O'Connell, 1995; ver también McDowell, 1991), que implicaba la decadencia de la centralidad de la familia como elemento reproductor de jerarquía e incrementaba la participación de la mujer en el trabajo. Pero bajo condiciones de extrema pobreza, tal con-

dición a menudo implicaba aislamiento, dificultades para encontrar trabajo y participar en la vida comunitaria. Posteriormente, las comunidades se seguirían debilitando por la creciente falta de respeto hacia los adultos. Esto no implica que los niños criados en familias sin padres se vuelvan de algún modo desviados, sino que bajo las condiciones de carencia de apoyo comunitario, y donde los adultos de cada sexo no trabajan o lo hacen en empleos sin oportunidades de progreso, incapaces de salir adelante, estos últimos ya no dan una imagen positiva a los jóvenes acerca de su propio desarrollo futuro en términos de trabajo o de éxito. Muchos adultos son vistos simplemente como ejemplos de fracaso y desesperanza de vida. También, y por razones similares, se da una declinación en la función de la escuela; aumentan los índices de ausencias injustificadas, las escuelas de las áreas más pobres padecen la caída de recursos y una creciente dificultad para ofrecer a los jóvenes una clara imagen de acceso a la capacitación que los hará establecer una diferencia en la vida (ver Pitts, 1998). El proceso de inclusión social, a través de la transición de la escuela al trabajo, se reemplaza por el proceso de exclusión social mediante la transición hacia el desempleo, los trabajos sin expectativas y la economía delictiva como fuentes de oportunidad y de victimización.

Entre tanto, la clase media y lo que queda de la clase obrera fordista aún siguen siendo el único gran grupo, aunque empiezan a reducirse de forma continuada. De aquí que el proceso de fragmentación social se presenta bajo la forma de creciente inseguridad económica. El "aplastamiento" de las capas de los directivos y ejecutivos medios, bajo el impacto de la información tecnológica y el auge de los contratos de consultoría de corto plazo, que reemplazan a las carreras tradicionales, ha calado rápidamente en el nivel medio de los directivos, tal como lo ha hecho a nivel de los comercios, como resultado del mismo proceso de contratación externa, computarización y producción "justo a tiempo" al estilo postfordista. Tal como lo apuntó Anthony Sampson, "el tradicional hombre de la empresa, con su confianza en los au-

mentos anuales y su pensión de retiro que crece, está tan extinto como los clérigos del siglo XVIII. Su decadencia... está causando uno de los cataclismos sociales más grandes del siglo XX, y sus repercusiones recién se están difundiendo" (Sampson, 1995, p. 307). John Gray, quien en recientes escritos se ha enfocado en las inseguridades de la clase media, habla del "desaburguesamiento" de lo que queda de las antiguas clases medias... Estratos completos de lo que antes eran los empleados medios de dirección han sido eliminados mediante recortes corporativos, lo que tiene un efecto benéfico inmediato sobre los estados de cuenta de las ganancias" (Gray, 1998, p. 72, ver también Luttwak, 1998). Gray señala que a través de todo el mundo, las empresas anglosajonas están descargando responsabilidades en aspectos tales como el suministro de pensiones, costos de vivienda y seguros de salud para sus empleados contratados temporalmente. Si el asistencialismo de la empresa hace por las clases medias lo que gran parte del asistencialismo estatal hizo por los pobres, entonces ambos grupos están en posiciones de creciente inseguridad. La exclusión de los pobres de la ciudadanía del asistencialismo estatal efectivo se equipara con la transformación de la clase media de ciudadanos a consumidores, pues compran sus pensiones, el cuidado de su salud y la educación de sus hijos, en el mercado privado.

Pero el proceso de exclusión social, o más bien de autoexclusión, de los muy ricos acarrea mayores consecuencias. Los sectores rectores del capital ya no necesitan invertir en la socialización y la estabilización política de la clase obrera masiva. Es muy fácil mover las operaciones globalmente en busca de fuentes de mano de obra barata, o incluso de profesionales capacitados, tales como trabajadores de información tecnológica, mientras que sectores importantes del capital financiero tienen una necesidad mínima de la tradicional fuerza laboral de los trabajadores de cuello azul. La movilidad global del capital y el alcance de las corporaciones transnacionales ha impulsado el crecimiento de una "clase capitalista transnacional" (Sklair, 2001; ver también Reich, 1992), que

se identifica cada vez menos con una localidad o país en particular, y guarda poco interés en el suministro de bienes del asistencialismo público por parte de los Estados nacionales, pues éstos pueden proporcionarse fácilmente de forma privada, en tanto que los sistemas de comunicación globales amplían sus oportunidades de ubicación. En un sentido real, ya no existe más la necesidad de ser miembro de una sociedad definida en términos de un territorio nacional particular y un sistema político. Como expresó Christopher Lasch acerca de la élite gobernante estadounidense:

Hasta un punto alarmante, las clases privilegiadas por la definición expansiva, el 20% superior, se han vuelto independientes, no sólo de las ciudades industriales desmoronadas, sino de los servicios públicos en general. Ellos mandan a sus hijos a escuelas privadas, se aseguran contra emergencias médicas enrolándose en los planes apoyados por las empresas y contratan guardias de seguridad privados para protegerse contra la creciente violencia en su contra. En efecto, se han apartado de la vida común. No es que no vean el sentido de pagar por servicios públicos que ya no usan más; muchos de ellos han dejado de pensar como estadounidenses en cualquier sentido que sea importante (Lasch, 1995, pp. 45-46).

Hay una diferencia muy importante entre la exclusión social de los pobres y la autoexclusión de los ricos. La ascendente exclusión de los pobres –del asistencialismo y los derechos de ciudadanía del asistencialismo estatal, y de los empleos seguros del capitalismo fordista– es simultáneamente un proceso del debilitamiento interno y del desmembramiento de la comunidad y de su capacidad de movilizarse contra el capital y defender sus derechos tradicionales. Sin embargo, para los ricos, la autoexclusión del asistencialismo estatal es una celebración de fortaleza, de la capacidad de proveer servicios privados y eliminar cada vez más la preocupación de la negociación y el compromiso con la clase trabajadora. Este proceso de fragmentación política e institucional es de vital importancia.

Estas tendencias a la desigualdad y la fragmentación se reproducen a escala global. En 1960, el promedio de ingresos de la quinta parte más rica del mundo, que vive principalmente en los países industrializados, era 30 veces mayor que el de la quinta parte más pobre, que vive predominantemente en los países del Tercer Mundo. Hacia 1990 era 60 veces más grande y ha continuado agrandándose (Watkins, 1995, p. 3; ver también Cornia, 1999). Por lo tanto, la movilidad global del capital en busca de mano de obra barata no tiene un efecto igualitario, sino que en cambio destruye las economías nativas, sin reemplazarlas por otras fuentes equivalentes de ingresos. La globalización y el libre mercado se asocian con la creciente desigualdad de los países pobres (Lundberg y Squire, 1999), en tanto que la agricultura autóctona de subsistencia está siendo devastada por el interés de dominación de las grandes empresas agrícolas multinacionales (Shiva, 2000). Los programas de ajuste estructural destrabados por el *Banco Mundial* y el *Fondo Monetario Internacional* para estos países, tienen el efecto de sustituir gran parte de la producción local por importaciones, elevando el desempleo y manteniendo a la clase obrera del Tercer Mundo como fuente de mano de obra extremadamente barata (Bello, 1994; Chossudovsky, 1997). A pesar del desplazamiento de muchos procesos de manufactura no especializados hacia trabajos estatales mal pagados, un número creciente de países en desarrollo se encuentran "desamparados en un sistema económico mundial que perdió el interés en los recursos competitivos que cierta vez lo hicieron viable, tales como los cuantiosos suministros de materias primas y fuerza laboral" (de Rivero, 1999). Se ha dado una caída tanto en la demanda de mano de obra, como en lo referente a las materias primas relativas al agitado crecimiento poblacional.

La incapacidad del capitalismo para generar un crecimiento sostenible en el Tercer Mundo, a pesar de los masivos programas de desarrollo y de la libertad del capital para pasearse por el mundo, es uno de los síntomas claves de la profundización de su crisis (Mészáros, 2001). La perspectiva de la modernización en

gran medida se ha abandonado como teoría de desarrollo global. Al comienzo de la década de 1980, el Gobierno de los Estados Unidos abandonó los principios centrales de la teoría de la modernización, tal como se ejemplifica en la "Doctrina Rostow" (Rostow, 1962), de acuerdo con la cual, los países pobres seguirían la senda del capitalismo, a favor de la visión de las tareas de los Gobiernos del Tercer Mundo, como la idea de simplemente mantener la solvencia y la gestión de una cuantiosa deuda (Arrighi, 1991). Las instituciones que aseguran los intereses del capital global (el *Banco Mundial*, el *Fondo Monetario Internacional*, etc.) hablan ahora de la necesidad de una "buena gobernancia" en los Estados del Tercer Mundo. La modernización, como proceso institucional de gran escala y de cambio social, ha sido reemplazada por una administración eficiente que asegure el pago de la deuda. No hay ningún proceso de "contagio" ni de "modernización de las áreas rezagadas", sino más bien un único proceso global de fragmentación económica y social, y de creciente desigualdad. La retórica de la modernización carente de significado, funciona simplemente como una pantalla de humo ideológica para conseguir la dominación mediante las instituciones del capital global.

LA FRAGMENTACIÓN POLÍTICA

A la par de la exclusión *social* como una cuestión de pobreza e inseguridad, la exclusión de los estándares de vida y las oportunidades de esta última, considerados como derechos normales, un proceso paralelo se encuentra debajo del camino de la exclusión *institucional* de los mecanismos y conductos de negociación política y de comunicación, dentro de los cuales se estableció el compromiso entre las clases sociales. El Estado de bienestar keynesiano caracterizó a una sociedad donde la clase gobernante vio la necesidad de compromiso con las clases obrera y media, porque comprendió que, en definitiva, la producción es un pro-

ceso *social*. El capital global sin trabas y el financiero especulativo ven a la creciente producción como un proceso de obtención de ganancias a corto plazo, donde la estabilidad de la sociedad en general ya no es más un asunto en la agenda. Es importante comprender que la exclusión institucional ocurre en ambos extremos de la estructura social.

Para la clase trabajadora, las comunidades estables sostenían la formación de sindicatos, las instituciones de compromiso más importantes. Las negociaciones con los empleados podían tener lugar ya sea en el entorno de la empresa individual o en la industria y, bajo la modernidad organizada, a través de un marco corporativo organizado y sostenido por el Estado. Con la decadencia de las instituciones de movimientos laborales regionales y nacionales, la representación y la organización de los intereses de la clase obrera a nivel del Estado se debilitó drásticamente. La exclusión de un número de pobres cada vez más grande de los órganos de representación política, de negociación y de compromiso, tiene poco interés para el capital, que ya no necesita entablar el diálogo con la oferta laboral que está cada vez más fragmentada, falta de capacitación y altamente trastocada, a la vez que es fácilmente reemplazable. Donde se requiere lealtad por parte del trabajador, como en las grandes plantas productivas que subsisten, ésta es crecientemente orquestada por la propia empresa, en lugar de serlo a través de la negociación con los sindicatos. De otra manera, el principal mecanismo disciplinario pasa a ser la sustitución de los obreros de bajos salarios. El capital no demanda la incorporación, sino la destrucción de la organización sindical.

Para los pobres se pueden encontrar algunos sustitutos, por ejemplo, en las organizaciones políticas étnicas, particularmente en los Estados Unidos. Sin embargo, estas organizaciones puede que no lleguen hasta los muy pobres, y el ser miembro de grupos comunitarios basados en una afinidad étnica, a diferencia de la organización clasista, no conduce necesariamente a conseguir el manejo sobre recursos económicos o políticos.

En consecuencia, el capital puede simplemente apartarse de sus responsabilidades tradicionales, derivadas del "propio interés ilustrado". La élite burguesa se convierte, según la caracterización de Zygmunt Bauman, en una nueva variedad de amo ausente, cuya movilidad global

implica la nueva desconexión del poder de sus obligaciones, verdaderamente inaudita en su incondicionalidad radical: los deberes hacia los empleados, pero también hacia los más jóvenes y débiles, incluso hasta con las generaciones venideras y hacia la autorreproducción de las condiciones de vida de todos; en breve, liberarse del deber de contribuir a la vida diaria y a la perpetuación de la comunidad (Bauman, 1998, p. 9).

Nuevamente, el capital financiero compendia el contraste más fuerte entre lo viejo y lo nuevo. En la ciudad industrial victoriana, el previsor capitalismo manufacturero tradicional, que vigila las vecindades de los trabajadores desde su oficina, no sólo comprendió la necesidad de emplear a sus habitantes con un estado de salud razonable, sino que con el tiempo tendría que toparse con los representantes de sus sindicatos. En sentido opuesto, en la ciudad de Londres del siglo XXI, los ejecutivos financieros miran, desde el rascacielos de *Canary Wharf*, la desolación de las barriadas de *East End*; pero sus miradas se voltean rápidamente hacia sus terminales de computación, que los conectan con Frankfurt, Tokio, Nueva York –lugares que están mucho más cerca que los barrios pobres a mil metros de distancia, y que tienen mucho más efecto sobre sus salarios y el futuro de sus actividades económicas.

La tendencia es hacia mayores centros urbanos más conectados unos con otros, que hacia las economías regionales y las estructuras sociales. Ésta es la base de la polarización espacial y social de la "ciudad global", tal como lo expresaron escritores como Saskia Sassen (1991, 1994, 1998), para quien los pobres cada vez aparecen menos como trabajadores que pueden ser empleados y estar sujetos a un mínimo básico de educación y sociali-

zación, sin hablar de los sindicatos con los que se tiene que negociar, sino que, en cambio, se presentan como un grupo que va a ser acorralado y del cual se extraerá una mano de obra ocasional, no capacitada y de bajos salarios. El lenguaje de las relaciones de clase lleva adelante un cambio sutil: desde los grupos sociales activos, cuyos intereses van a ser ajustados, si bien de muy mala gana, a través de la representación y la negociación, a poblaciones de riesgo que se van a manejar a través de un diseño de altos pasillos y recintos cerrados, cámaras de televisión de circuito cerrado y un control de acceso custodiado por la floreciente industria de la seguridad privada (ver Davis, 1990, 1992).

LA CRISIS URBANA

Todos estos hechos aparecieron conjuntamente en paralelo con la creciente crisis de la vida urbana. A través de toda la historia del capitalismo, la ciudad ha sido la forma fundamental de organización espacial para agrupar al capital con el trabajo, y organizar la circulación de mercancías. El impacto de la fragmentación económica en la ciudad se muestra aquí sucintamente expresado por Peter Hall, como el escenario en el cual

las ciudades más grandes se caracterizan por la creciente dispersión del ingreso real entre los habitantes ricos y los habitantes pobres, con una "media que desaparece, y que representa los empleos que se exportan hacia otros sitios". En parte esto es el resultado de los desplazamientos económicos que producen los empleos de "servicios informáticos" altamente cualificados y de elevadísimos salarios, y los "McEmpleos" ocasionales, de bajo salario; y también en parte por el desempleo estructural a largo plazo que se da entre grandes sectores de la población, que antes encontraban trabajo en la manufactura y en el sector de transporte de mercancías. Esto genera una sociedad cada vez más polarizada, con centros de alto consumo para elevados ingresos junto a guetos de bajos ingresos, que dependen del trabajo en servicios temporales y de los subsidios del asistencialismo. La calidad de

vida de estos ciudadanos demuestra con claridad estos contrastes extremos, aun cuando ellos ocupen el mismo espacio geográfico.

De manera típica, tal situación era característica de las grandes ciudades de aquellos países que se encontraban en un rápido desarrollo (p. ej.: el siglo xix en Europa y Norteamérica; el siglo xx en América Latina). Sin embargo, ahora esta situación parece haber retornado a las ciudades del mundo avanzado, que antes [durante la era del "Estado de bienestar" de las décadas de 1950 y 1960] parecían haber atravesado y salido de esta fase. La nueva oleada de inmigración es un factor que contribuye en muchas de esas ciudades; pero la reestructuración económica, en especial la caída de los empleos sindicalizados y bien pagados en las ocupaciones tradicionales de manufactura y transporte, es otro de los elementos que impacta tanto a los trabajadores de cuello azul, como a los nuevos inmigrantes (Hall y Pfeiffer, 2000: 9).

Entre tanto, la decreciente preocupación de los ricos por la ciudad como bien público esencial, contrasta con el siglo xix y los comienzos del siglo xx, cuando, tal como lo señalé anteriormente, las tendencias generales de desarrollo del capitalismo se complementaban con las actividades de los reformistas sociales en la construcción de comunidades obreras estables y en la consecución de un espacio público ordenado. Davis Harvey, habiendo notado los logros de la filantropía burguesa del siglo xix (ver Capítulo II), continúa:

En el pasado, el capital consideraba que las ciudades eran lugares importantes que debían organizarse con eficiencia y donde se necesitaba que los controles sociales funcionasen de un modo significativo. Ahora vemos que al capital ya no le preocupan más las ciudades; necesita menos trabajadores y gran parte de éstos se puede mover por todo el mundo, descartando a voluntad poblaciones y lugares problemáticos. Como resultado, ha desaparecido la coalición entre el gran capital y los burgueses reformistas. Más aún, la propia burguesía parece haber perdido gran parte de su sentimiento de culpa acerca de las ciudades; y ha llegado a pensar (según creo) que existe escaso temor de la revolución socialista y, de esa manera, ha atenuado su compromiso con el reformismo. Cada vez más, la riqueza los encierra firmemente en esas fantasiosas "comunidades aportonadas" que se están

construyendo por todos los Estados Unidos, y que permiten que la burguesía se aisle de lo que sus representantes denominan con el odioso término de *underclasses*. Éstas son olvidadas dentro del gueto, junto con las drogas, el SIDA, las epidemias de tuberculosis y muchas otras cosas más. En esta nueva política, los pobres ya no importan más. Su marginación va acompañada por un hastío indiferente por parte de los ricos y los poderosos (Harvey, 1997, p. 20).

Esta no es una postura sostenida exclusivamente por la izquierda. El conservador estadounidense Charles Murray habla de la transición a la "democracia custodial mediante subsidios hacia la población en general, aunque aparta a las clases marginadas. En efecto, la democracia custodial asume como premisa que no se puede esperar que una porción sustancial de la población funcione como ciudadanos" (Murray, 1999, p. 5). Aunque aquí, son las características de los propios pobres las que determinan su salida de la democracia, en lugar de serlo las dinámicas de acumulación de capital. Por supuesto, no se trata de que el capital pierda a la vez su interés por las *ciudades* o por lo que sucede en la sociedad en general; necesita proteger sus medios de comunicación, defender el consumo y las áreas de residencia de la clase media y de los ricos, los centros de compras, las áreas de esparcimiento y los distritos financieros que funcionan como centros de mando y de control de las operaciones globales. Sin embargo, la desconexión de los ricos de la ciudad como centro de vida colectiva, compartido por las clases sociales, es el reflejo de la ruptura del capital con la ciudad como el sitio de la reproducción y socialización del trabajo. Uno de los indicios espaciales, tal como Harvey menciona, se encuentra en el crecimiento de comunidades aporcionadas y de áreas urbanas fortificadas. Esta creación es un fenómeno global del que se pueden encontrar los ejemplos más espectaculares en los países del Tercer Mundo (Caldeira, 1996; Martin y Schumann, 1997). En los Estados Unidos, cerca del 10% de la población vive en comunidades de puertas cerradas (Thurow, 1996: 264; Gray, 1998: 116; ver también Alexander, 1997, p. 223). Por

supuesto, la capacidad de los ricos de separarse de los pobres es mayor en los Estados Unidos, debido a una relativa abundancia de territorio (Kaplan, 1998); sin embargo, el proceso de separación institucional, como parte del colapso de la modernidad organizada y del Estado de bienestar keynesiano, es un fenómeno generalizado. En Gran Bretaña, la demanda de los muy ricos por casas lujosas en "condominios cercados y guarecidos de 'las clases bajas'" (Thomas, 1998) está en alza tanto en las zonas suburbanas, como en las afueras de las ciudades, al igual que en las ahora renovadas -y fortificadas- áreas superpobladas de la ciudad (Orr, 1999).

Sería un error considerar a los condominios cerrados simplemente como una opción de los ricos, que deja fuera al resto de la sociedad. En la medida en que la ciudad se fragmenta, y la economía sustantiva y la interdependencia social entre los grupos y las clases sociales dan lugar a relaciones de inseguridad y de riesgo, por supuesto ya no son sólo los ricos quienes habitan tales áreas. Los condominios cerrados o los bloques de edificios muy bien custodiados son la imagen especular de los antiguos villorrios delictivos (*rookeries*), o del gueto moderno, o de las propiedades de zonas deprimidas, donde los extraños son sometidos a un nivel muy alto de amenazante vigilancia. Por cierto, muchos de los problemas de pobreza y delito de las áreas de indigencia se ven exacerbados por el aislamiento de las grandes y decadentes áreas de viviendas públicas. Entre tanto, las comunidades estables de la clase trabajadora y la clase media también intentan cercarse de lo que consideran áreas adyacentes peligrosas. Ya no es que solamente el capital se proteja de los pobres, sino que diferentes estratos de la población se protegen unos de otros. La presión que ejerce la entrada restringida a espacios públicos, tales como parques, galerías, centros de diversión o de compras, es otro elemento de esta tendencia. La "economía moral del lugar y del espacio" como un ordenado territorio público, donde tuvo lugar la participación de todas las clases en la circulación de mercancías, y a través de la que se podrían generalizar las relaciones

sociales del control del delito, se fragmenta en una masiva propiedad privada (Shearing y Stenning, 1987) y en un "multifacético mosaico espacial de lo seguro y lo inseguro... dominado por jaulas de seguridad y un panal de fortificaciones residenciales y comerciales" (Christoferson, 1994, p. 421).

EL DEBILITADO ESTADO AUTORITARIO

Estas dinámicas se ven reflejadas a nivel del Estado y la política, aunque no de un modo inmediatamente directo, sino más bien como el resultado de tensiones y conflictos. Las tensiones claves son, en primer lugar, y tal como lo he apuntado, la movilidad general del capital y la decreciente importancia de la mano de obra bien pagada, fordista y estable, que hace que el capital pierda interés en gastar en socialización y asistencialismo. Sin embargo, los Estados capitalistas democráticos que cuentan con una importante porción de actividades asistencialistas, aún intentan sostener, bajo la presión del electorado, una política social que apunte a la integración social y a los derechos ciudadanos.

En segundo lugar, la movilidad global acrecienta el poder del capital en relación con el Estado, tal como se evidencia en los decrecientes niveles de política impositiva corporativa. Esto a menudo se asocia con la tesis de que el Estado no es necesario en el nuevo orden de la "hiperglobalización". Los críticos señalan que aunque la relación de poder entre el capital y el Estado se ha desplazado a favor del primero, aún no se ha alcanzado la etapa en que el capital se pueda emancipar por completo del poder estatal (ver Gray, 1998; Held y otros, 1999; Lloyd, 2000). Se trata en cambio de lo que el capital le demanda a un Estado que está cambiando. Este cambio se puede caracterizar como la *integración social* que tiende hacia *la seguridad y el manejo del riesgo*.

Como resultado de estas contradicciones, el Estado se mueve en dirección de lo que podríamos llamar "autoritarismo debilitado". Se debilita en relación con el capital, cada vez menos ca-

paz de cumplir con las políticas que demanda una gran parte del electorado. Esto conduce a profundos cambios en la naturaleza de las políticas de las democracias capitalistas, cambios que tienen importantes implicaciones en la delincuencia. Al mismo tiempo, el Estado, presionado por el capital, se mueve para cumplir nuevas funciones en el control delictivo y en el manejo de la población, y lo hace en una dirección autoritaria que se ve ejemplificada por las nuevas formas de gobernanza y soberanía, y por las nuevas relaciones entre el poder público y el privado.

LA CRISIS DE LA POLÍTICA Y DE LAS MEDIDAS SOCIALES

Las tradiciones de la política social y de las instituciones, discursos y marcos de referencia de la gobernanza conducida por el Estado, que alcanzaron su punto más alto con el Estado de bienestar keynesiano, se vuelven objeto de crecientes tensiones y presiones en la medida en que los requerimientos de la acumulación del capital y la cohesión social se mueven en direcciones diferentes. Los Gobiernos están constantemente presionados por cumplir con las demandas del capital, por forzar a los trabajadores a aceptar empleos con bajos salarios e inseguros, o ninguno en absoluto, a la vez que mantienen la cínica pretensión de querer mejorar las políticas sociales. Como los impuestos al capital son forzados a descender, los gastos del asistencialismo están más estrechamente ligados a los impuestos personales. Bajo condiciones de creciente inseguridad, la clase media toma cada vez más sus propias provisiones y objeta tener que pagar para los muy pobres. En el intento por reconciliar estas presiones contradictorias, cobran gran importancia las diferentes tradiciones nacionales. La decadencia del asistencialismo y los manejos de la modernidad organizada han sido especialmente serios donde la ascendencia de la "Nueva Derecha" neoliberal se estableció durante la década de 1980. El polo extremo, ya sea festejado o temido, lo constituyen los Esta-

dos Unidos, donde se están sepultando los últimos residuos del *New Deal*, y donde el Estado ha abandonado cualquier tipo de implicación con la gobernancia de grandes sectores de la población (ver Hardt y Negri, 2000). Gran Bretaña ha intentado continuar, pero desde un umbral más alto de derechos asistencialistas y del gasto público, que de alguna manera se encuentran atrincherados.³ Sin embargo, las mismas tensiones están inevitablemente presentes.

Los socialdemócratas y los liberales continúan sosteniendo la premisa de que el apoyo para las políticas de mejoramiento se puede movilizar apuntando a las consecuencias de su ausencia. Por ejemplo, un importante informe acerca de las políticas sociales británicas sobre la pobreza y la exclusión social, señala que

sin importar ningún tipo de argumento moral o sentimientos de altruismo, *todos comparten* el interés por la cohesión de la sociedad. En la medida en que se ensancha la brecha entre ricos y pobres, los problemas de los grupos marginados que están siendo olvidados repercuten en una mayoría que se encuentra más cómoda. Así como en el siglo XIX, fue el interés de todos por introducir medidas de salud pública que permitiesen combatir la difusión de enfermedades fomentadas por la pobreza, en este siglo es *el interés de todos* remover los factores que están promoviendo las enfermedades sociales de las drogas, el delito, el extremismo político y el descontento social (Barclay, 1995, p. 34, las cursivas son mías).

La repetida referencia se da hacia un consenso asumido, como si aún existiese una suave continuidad de las preocupaciones filantrópicas burguesas del siglo XIX. En cambio, la situación, creciente en Gran Bretaña e incluso mucho más aguda en los Estados Unidos, es una donde:

³ Tal como lo señalé anteriormente, en Gran Bretaña, donde el Estado asistencialista se abrió a todas las clases, en lugar de enfocarse sólo en los pobres, grandes sectores de la insegura clase media apoyan el mejoramiento de los servicios públicos, pero se muestran más indecisos acerca de los impuestos personales que realmente se requieren para el logro de tales mejoras.

No hay ninguna cruzada contra la pobreza... Ningún político influyente demanda pleno empleo para la fuerza laboral del país. Ninguna figura pública prominente insiste en que la riqueza que fue tomada de los pobres para ser dada a los ricos durante los años del conservadurismo, debería ahora regresar a los más desfavorecidos. Sólo existe el inmenso parloteo de los poderosos, quienes están rodeados de las víctimas de su influencia, y que aún continúan ignorando el no descubierto mundo de los pobres (Davies, 1997, p. 305).

El capital tiene cada vez menos voluntad de aportar los recursos para tal ingeniería social. Los ricos, por cierto, intentarán protegerse contra "las drogas, el delito, el extremismo político y el descontento social", pero no buscarán tanto el hacerlo a través del *asistencialismo* como bien público, sino cada vez más a partir de la *seguridad* (física) como bien privado: mediante la movilización hacia zonas más seguras y desviando los remanentes de los gastos estatales hacia la acción de la policía represiva. Ya han hecho grandes progresos al segregarse de los pobres, quienes están cada vez más "fuera de la vista, fuera de la mente" (ver Murray, 1999). A pesar de su intento por mantener el compromiso público de solucionar los problemas sociales y paliar la fractura de la integración social, el Estado se encuentra crecientemente subordinado a la lógica del mercado, los rigores de la privatización, y el desmembramiento del asistencialismo público y de los canales de negociación y compromiso entre los grupos y las clases sociales.

Cada vez más y más, las principales funciones económicas del Estado deben... guiarse a asegurar las condiciones ideológicas e institucionales de la desregulación de las relaciones económicas y laborales impuestas internacionalmente, además de contribuir a la aceptación general del alineamiento de las políticas públicas con las normas de competitividad internacional... En este sentido, la más apremiante tarea ideológica del Estado consiste en convencer a todos de la necesidad de desinstitucionalizar y "desubstancializar" toda forma previa de negociación consensuada, p. ej.: *descorporeizar* a las clases sociales (Tsoukalas, 1999, p. 65).

Los aumentos del gasto estatal ciertamente ocurren, pero están canalizados hacia el manejo del riesgo, la ley y el orden, elevando el número de la población encarcelada. Mientras tanto, la responsabilidad de remediar la pobreza y la exclusión social se desvía de la política pública y se reenfoca en el individuo, mediante un desplazamiento en el énfasis, que del fortalecimiento de la comunidad, pasa ahora al refuerzo de la familia. De este modo, el objeto de la política se traslada de la responsabilidad social a la individual, y se manifiesta en la disfuncionalidad familiar, los padres ausentes, sostenes de familias solteros, etc. (Wacquant, 1999).

El resquebrajamiento de la capacidad del Estado para comprometerse en una política social, subyace en la ascendente crisis de la política democrática. Susan Strange lo expresa así:

Hoy en día, parece que los jefes de los Gobiernos son los últimos en reconocer que ellos y sus ministros han perdido la autoridad que solían tener sobre las economías y las sociedades nacionales. Su mando sobre los resultados no es el que solía ser. Los políticos de todas partes hablan como si tuviesen las respuestas a los problemas económicos y sociales, como si en realidad estuviesen a cargo del destino de su país. La gente ya no cree más en ellos (Strange, 1996, p. 3).

Existe una progresiva "muerte de lo social" (Rose, 1996), como el territorio de solución de los problemas sociales reconocidos colectivamente. Los individuos y los grupos más bien esperan generar sus propias soluciones. Políticamente, esto aparece como el debilitamiento de la esfera pública de la discusión democrática y de la formación de la opinión (ver Habermas, 1989).

Durante la década de 1970, Habermas (1976; ver también Lea, 1982) había sostenido que esta creciente *crisis de racionalidad* del Estado –su incapacidad de manejar eficazmente la economía y el sistema social– resultaría en una *crisis de legitimación*, una desilusión cada vez mayor del público por las políticas convencionales y las entidades estatales, la ascendente demanda por la justifica-

ción discursiva de los valores y las políticas, y la renovación de la esfera pública. En verdad existe evidencia de desilusión por las estructuras políticas vigentes en este fenómeno, lo que genera que menos votantes se presenten a sufragar en las elecciones y que haya una creciente desconfianza en los representantes políticos (Pharr y Putman, 2000; Hertz, 2001).⁴ Pero, mientras que en la mayoría de las democracias capitalistas occidentales, las encuestas de opinión pública sugieren la continuación de un fuerte encargo por los servicios del asistencialismo, la movilización de esta demanda se enfrenta con poderosos obstáculos en la fragmentación de las tendencias citadas anteriormente, que tienden a priorizar aspectos de peligrosidad e inseguridad públicas. Mientras tanto, los Gobiernos exhiben una inseguridad creciente acerca del apoyo público para varias funciones que tienen a su cargo. Existen renovados intentos por asfixiar el debate público, mediante nuevas políticas que maximizan la distancia entre la generación de políticas y los tradicionales procesos democráticos de discusión y responsabilidad. Las características que emergen de este proceso incluyen: la referencia a fuerzas globales que se encuentran más allá del Estado, que clausura las opciones políticas y dicta que "no hay otra alternativa"; la incoherencia ideológica de doctrinas como la de la "Tercera Vía", en la que las demandas del capital y los requerimientos de la integración social se reconcilian por encanto mágico; la relativa declinación de los parlamentos y las legislaturas como espacios de generación de políticas a favor de grupos focalizados, de encuestas y de otros mecanismos que sustituyen el debate político por el simple registro de opiniones.

El Estado y sus similares burocracias privadas se refugian en la seudorreducción de la complejidad, que no ocurre en el mundo real de las auténticas soluciones a los problemas ambientales,

⁴ Las elecciones generales en el Reino Unido, en mayo del 2001, lograron el récord de porcentaje más bajo de asistencia, que fue de 58% de las personas en condiciones de votar. La "victoria aplastante" del Gobierno de Blair se consiguió precisamente con un 25% del total de la población británica.

económicos y sociales, sino en los cada vez más autorreferenciales indicadores de comportamiento, frecuentemente manipulados, y en los resultados medidos, que simplemente evalúan la capacidad de la organización para producir estadísticas e índices de planificación. El adecuado arreglo mental para la burocracia del siglo XXI se ha desplazado de la tradicional ética del servicio público y la demanda de la reforma social pragmática, hacia el evasivo cinismo del médico que por lo regular hace una visita sumamente corta.

En tanto, el debilitamiento del Estado como el mecanismo efectivo para encausar o sacar adelante a la economía y a los sistemas sociales, lo convierte en vulnerable para los sistemas del clientelismo organizado y la corrupción. Los partidos políticos ya no pueden asegurarse fondos de la población, de los sindicatos, de las pequeñas empresas, etc., y encuentran cada vez más difícil justificar el suministro de tales aportes monetarios, dada su carencia de resultados sustantivos; en tanto que los costos de la organización política y de la movilización de las comunicaciones dominadas por los medios masivos se elevan continuamente, de modo que sólo los más respaldados por fondos pueden ingresar a la contienda política nacional (Tsoukalas, 1999). Como resultado, las formas tradicionales de corrupción estatal, mediante la cual el otorgamiento de favores fue *secretamente* comprado a los políticos individuales y a los burócratas estatales por parte de hombres de negocios que perseguían lucrativos contratos públicos para bienes o servicios, se reúnen en un abierto clientelismo público, donde se asegura el respaldo a los partidos políticos mediante individuos acaudalados e intereses con una fachada de negación de cualquier favoritismo particular. Esto va acompañando por la creciente fusión del servicio civil público con los intereses comerciales privados, celebrada en nombre de "la eficiencia del sector privado" dentro del Gobierno. El papel del Estado como institución, cuyos recursos van a ser arrebatados por grupos con poderosos intereses, comienza a desplazar al primero como el agente efectivo de la cohesión social.

El hecho de que el capital decline su interés en sostener las instituciones de la modernidad organizada, no implica que ya no necesite más del Estado. Éste seguramente se está debilitando en relación con el capital globalizado, pero aún sigue siendo una institución vital, que está siendo empujada en dirección a nuevos tipos de acción policial coercitiva y autoritaria, a partir de la preocupación por el riesgo y la inseguridad.

El colapso de la modernidad organizada atestiguó el desplazamiento parcial del Estado por parte del capital, con crecientes formas de gobierno directo mediante la propiedad privada. La privatización de los servicios públicos y del asistencialismo se complementa y se refuerza a nivel global con la presencia de instituciones, como la *Organización Mundial de Comercio*, que simplemente son foros para la deliberación directa de los representantes del capital privado, y para el creciente encargo al Estado para que establezca leyes sobre aspectos relativos al comercio internacional y la apertura al capital privado de oportunidades lucrativas en los servicios públicos y el asistencialismo recientemente privatizados. Mientras que la globalización va acompañada de nuevas formas de regulación económica que necesitan quitarse de encima el peso de las funciones del asistencialismo estatal, éstas ya no están siendo asumidas por organizaciones asistencialistas globales, sino que, en cambio, se están dejando fuera de la agenda (ver Mishra, 1999).

Sin embargo, estas instituciones y estos acuerdos son garantizados por los Estados nacionales, que todavía suministran el respaldo final en términos de fuerza armada –incluso si la fuerza relevante son las fuerzas armadas “visitantes” de otro Estado–, además del apoyo esencial de títulos de propiedad, la desregulación de las instituciones financieras y su protección de la “interferencia política”, la licencia del asistencialismo privado y de empresas de seguridad, garantizando de este modo los derechos de defender el espacio privado, y así consecutivamente (ver

Sassen, 1996, 1999). De este modo, el Estado se retrotrae hacia el "gobierno a distancia" del siglo XIX, donde él "conduce" la economía y el sistema social, en lugar de "impulsarlos" (Osborne y Gaebler, 1992) y concede gran parte de la gobernancia a las organizaciones privadas. Sin embargo, sería un error considerar simplemente que estos sucesos son un regreso a una etapa anterior del capitalismo.

Según la concepción de Foucault, discutida brevemente en capítulos previos, la forma de gobierno característica de la sociedad moderna implicaba la *gubernamentalización* del Estado: la asimilación de la dominación o soberanía coercitiva directa para ampliar las estrategias de gobernancia apuntadas a dar forma a las instituciones y procesos a través de los cuales los grupos sociales regulan su propia conducta. Esta subordinación de la soberanía al "gobierno a distancia" (Rose y Miller, 1992) se localizaba dentro de los límites e intereses del Estado-nación y de la comunidad nacional, y comprendía una diversidad de instituciones y relaciones sociales, incluyendo las del control del delito, así como una gran variedad de modos de funcionamiento. Sin embargo, todas estas estructuras formaban parte de un proyecto de gobernancia dentro del Estado-nación, que se preocupaba por la socialización de las poblaciones, su educación y disciplina, tal como lo requerían la acumulación del capital y su manejo. El Estado de bienestar keynesiano de la modernidad organizada estrechó la distancia entre lo público y lo privado, involucrando más directamente al Estado en los funcionamientos de la familia y de las empresas.

Este retroceso hacia el "gobierno a distancia" es de algún modo la fuerte reafirmación de la semiautonomía de las empresas y de la familia, y de las formas de gobernancia que éstas arrastran de cara a la decadencia del Estado de bienestar keynesiano. Pero dos características distinguen los sucesos actuales a partir de las estrategias de gobernancia características del siglo XIX. En primer lugar, el gobierno a distancia ya no constituye necesariamente una distancia definida por el Estado-nación. En tanto que la familia

sigue siendo en gran medida una institución privada dentro del territorionacional –aunque la inmigración en gran escala, con sus miembros desparramados por todo el planeta, modifica esta situación–, las empresas lo son cada vez menos. Tal como lo he acotado, la globalización trae movilidad de capital entre regiones, con el establecimiento de vínculos y dinámicas que amenazan la capacidad del Estado para alcanzar una política económica coherente, incluso una que no presente intervención (Castells, 1996). Ciertas formas de gobernanza ya no “gubernamentalizan” al Estado, sino que lo ignoran. Los lazos forjados por la acumulación de capital, las redes globales de comunicación, las transmisiones culturales, toman atajos e ignoran el territorio del Estado-nación, en lugar de complementarlo, si bien generalmente confían en él para obtener un título de propiedad legal o un apoyo de seguridad de último recurso. De este modo:

Dentro de los territorios nominalmente soberanos de hoy en día... los nuevos flujos de comunicación e información están descentralizando lo que una vez fueron autoridades soberanas, multiplicando los espacios operativos, dividiendo lazos de pertenencia y mezclando zonas de gobierno. Estos flujos aportan nuevos códigos alternativos de legitimidad contragubernamental, deseo y poder sobre las nuevas poblaciones de muchos lugares, para operar contra “las antiguas soberanías” (Luke, 1996, p. 23).

En segundo lugar, el capital privado se preocupa cada vez más por la seguridad, en lugar de hacerlo por la socialización. Los grandes motores de la disciplina, corporizados en la escuela, el hospital, la prisión, la fábrica y la familia, han sido desplazados por un acaparamiento parásito de corto plazo a partir de los bienes públicos privatizados y el reemplazo de la preocupación por la reproducción de la clase obrera por la de la neutralización de las poblaciones que pudiesen constituir un riesgo para la obtención de beneficios. En lugar de que la gobernanza sea la modificación y la dispersión exterior de la soberanía, como en el relato de

Foucault, la preocupación por los aspectos de soberanía trae sustanciales modificaciones en las estrategias de gobernancia. La nueva unidad de propósito entre la gobernancia y la soberanía, y entre el Estado y la gobernancia privada, se centra en el manejo del riesgo, siendo este último un concepto nuevo pero quizá ya trillado, en la teoría social (Beck, 1992). La popularidad del concepto de riesgo para describir relaciones entre grupos sociales refleja el hecho de que la fragmentación social y política está generando una sociedad en la cual las relaciones entre los individuos, los grupos y las clases sociales están gobernadas cada vez más no por canales estructurados de interacción y confianza, donde ciertas acciones, decisiones y respuestas se pueden esperar y comprender, sino por el riesgo de que ocurran antagonismos e interrupciones no deseados.

Los elementos de disciplina y socialización que permanecen, están, en tanto, dedicados de manera creciente a las tareas negativas de alentar a los jóvenes de clase trabajadora a revisar su pasado laboral y a aceptar empleos inseguros y de bajo salario. Los residuos del Estado de bienestar keynesiano se transforman en el "Estado de la tarifa laboral" (Jessop, 1994). La destrucción de la ingeniería social y del asistencialismo aparecen como su continuación. Los bombos y platillos acerca de la educación para las masas, de hecho significan, poniendo aparte la creciente provisión privada para la clase media alta y los muy ricos, el desplazamiento de la educación por varias formas insensatas de "capacitación en especialidades". De manera similar, el trabajo social, como reclamación y reintegración de los sujetos como ciudadanos, se ve desplazado por la evaluación administrativa, la clasificación y el manejo de problemas individuales en términos de su probable riesgo para la seguridad pública (ver Froggett, 1996). La disciplina y la socialización se fusionan en estrategias preocupadas por el manejo, la evaluación y la clasificación de poblaciones, en lo relativo a su potencial desestabilizador y a la toma de apropiadas medidas de neutralización del riesgo.

Estas medidas continúan tomando una orientación *actuarial*. Es decir, no es tanta la preocupación acerca de las características de los individuos, sino más bien acerca de aquellas de los grupos; y el objetivo de esa política no es cambiar demasiado esas características, sino neutralizar su efecto perturbador sobre el resto de la sociedad. La política social tradicional consistía en una gobernanza orientada a la socialización: es decir, a cambiar las características de las poblaciones, en especial, aunque no exclusivamente, de la clase obrera, a través de los varios tipos de disciplina y socialización. En contraste, el objetivo del manejo del riesgo radica en delinear las características de los grupos, desarrollar los predictores de probabilidad de actividad disociadora, e idear estrategias para su minimización. Johnathan Simon (1988) especifica la principal diferencia entre el poder disciplinario y el actuarial, de la siguiente forma:

Las prácticas disciplinarias se enfocan en la distribución de la conducta dentro de una población determinada (una fuerza laboral fabril, prisioneros, niños de escuela, etc.)... con el objetivo de... angostar la desviación y movilizar a los sujetos hacia la uniformidad (los obreros van a ser más eficientes y confiables, los prisioneros más dóciles, los niños de escuela más atentos y respetuosos). Las prácticas actuariales buscan, en cambio, delinear la distribución y establecer las estrategias para maximizar la eficiencia de la población tal como ésta se encuentra. Más que buscar cambiar a la gente ("normalizarla", según el apto término de Foucault), el régimen actuarial pretende manejarla en el lugar... En tanto que el régimen disciplinario intenta alterar la conducta y la motivación individuales, el actuarial modifica las estructuras físicas y sociales dentro de las cuales se desarrolla la conducta del individuo (Simon, 1988, p. 773).

El manejo actuarial de las poblaciones riesgosas abarca un amplio espectro, que va mucho más allá de las ideas tradicionales de peligrosidad. La movida clave consiste en que "la noción de riesgo se establece de manera autónoma a la de peligro" (Castel, 1991, p. 288). El riesgo ya no se basa en la presencia de indivi-

duos o de grupos concretamente peligrosos, sino en la combinación de factores abstractos que hacen que ciertas circunstancias sean más o menos probables. “Uno no comienza desde una situación conflictiva observable en la experiencia, más bien uno la deduce a partir de la definición general de los peligros que se desean evitar” (Castel, 1991, p. 288).

La pertenencia a un grupo definido como riesgoso conduce a varias formas de exclusión social. Esto se ve reforzado por la red informativa de la sociedad y la tecnología informática, cuyos efectos no yacen tanto en la exclusión *de* las fuentes de información, como en la exclusión *por medio* de la tecnología informática, que facilita el almacenaje y procesamiento de detallados perfiles, tales como los antecedentes delictivos, la historia laboral, los avales crediticios, las credenciales de educación, el área de residencia, etc., que permiten tomar decisiones sobre los *individuos* –tal como el rechazo al otorgamiento de créditos–, que son hechas sobre la base de estadísticas actuariales acerca de características *grupales*. La tecnología informática facilita y exacerba la exclusión social (Perri 6 y Jupp, 2001). El actuarialismo se reconecta de muchas maneras con la idea tradicional de soberanía, desplazada durante el siglo XIX por nociones de gobernancia más sofisticadas que apuntaban a la socialización. Precisamente cuando la soberanía se preocupa por la conformidad de la población hacia el derecho y la autoridad estatales, las estrategias actuariales simplemente intentan minimizar los riesgos que diversos sectores de la población presentan a la propiedad y la seguridad. En contraste con la disciplina y la socialización, ambas estrategias tienen en común que no existe ningún intento por cambiar las características generales de la conducta de los pobres. El actuarialismo es una de las formas claves en las que la gobernancia se vuelve a subordinar a las antiguas nociones de soberanía (ver Stenson, 1999, p. 64). Es menos importante que los pobres adquieran destrezas y habilidades que nunca usarán en el mercado laboral, e importa más que aprendan a ser pasivos y obedientes ante la ley. Por cierto, ésa es precisamente la “destreza” adquirida. La acción policial

social regresa a su acento sobre la policía, hablando ahora de la combinación de los patrullajes para asegurar sitios de producción capitalista o de actividad financiera, y la pacificación de poblaciones riesgosas. Tal como lo expresa Zygmunt Bauman:

los Gobiernos estatales tienen destinada una función apenas mayor que la de constituir distritos policiales sobredimensionados, coordinar la cantidad y calidad de policía en acción, barrer las calles de rateros e individuos molestos, y ajustar la estrechez de las paredes de la cárcel, que cobran gran importancia entre los factores de "confianza de los inversores", entre varios aspectos calculados cuando se toman decisiones de "invertir" o "no-invertir". Lograr la excelencia en el empleo de policía de distrito es el mejor (y tal vez el único) asunto que los Gobiernos estatales pueden hacer para persuadir a los capitales errantes para que inviertan en el asistencialismo de sus sujetos; y de esta forma conseguir las vías más cortas para la prosperidad económica de su territorio, y la añorada sensación de "sentirse bien" de sus electores, conducidos mediante el despliegue público de las destrezas de la acción policial y la pericia del Estado (Bauman, 1998, p. 120).

De esta manera, la preocupación política por "la ley y el orden", el tamaño de las poblaciones carcelarias, etc., y los temores públicos sobre el delito, comienzan a perder su conexión con las tasas reales de delincuencia y los riesgos de victimización—que han estado cayendo en los países industrializados durante los últimos años—, y se convierten en vehículo de temas de seguridad más generales de cara a la fragmentación social. Estos aspectos se fusionan cada vez más con los temores hacia las poblaciones desconocidas, y con la preocupación por su manejo.

La creciente naturaleza actuarial de las políticas les permite ser compartidas por el Estado y las instituciones privadas. La privatización y la mercantilización de los bienes públicos convierte a los ciudadanos en clientes que compran seguridad, de la misma manera que lo hacen con el cuidado privado de la salud. La organización comercial, en lugar de ser una forma de gobernancia privada enlazada al Estado-nación como parte de su gubernamentalización, se convierte en una forma de gobernancia cada vez

más importante. La privatización del espacio urbano, el nexo de la provisión de servicios privados con los movimientos globales del capital y las preocupaciones por los beneficios más allá de lo que se pueda remitir a los Estados nacionales, se están expandiendo; mientras que, a nivel local, el "contrato social" como base de los derechos ciudadanos está siendo desplazado por los "contratos de gobernancia" comerciales (Shearing, 1995), orientados a la seguridad, como por ejemplo, el hecho de que el acceso a condominios cerrados, grandes centros comerciales, redes de transporte, etc., esté sujeto a un examen o una supervisión electrónica. Ya que el Estado retiene el monopolio del empleo de la fuerza legítima, entonces sólo sus oficiales pueden aplicar la coerción directa. Las políticas actuariales del Estado pueden desplegar soberanía bajo la forma de coerción legal, tales como la intromisión de la vigilancia tecnológica, y la acción de la policía dura en ciertas zonas. Pero las instituciones privadas despliegan, de manera creciente, formas de gobierno basadas en los derechos cívicos de propiedad.

El paso de ciudadano a cliente también desplaza el foco del activismo político y social. La privatización cívica del antiguo consenso del asistencialismo estatal, que sostenía la relación pasiva experto-cliente entre el Estado y los grupos sociales, se transmuta en nuevas formas de apatía política, que se basan menos en el sentimiento de que la experiencia del gobierno ha cuidado los asuntos, y más en el cinismo, manifestado en la declinante concurrencia de votantes y en la transformación de la comunicación política en una inyección de los medios masivos, aspectos arraigados en la percepción del papel declinante del Gobierno en la determinación general de oportunidades de vida. Al mismo tiempo, la decadencia de las antiguas seguridades de la ciudadanía social del Estado de bienestar, que se daban por hechas, trae la aparición de un nuevo activismo, particularmente mediante las comunidades de clase media, que se dan cuenta de que tienen que comprar su seguridad, e incluso si ésta es aún provista por el Estado, ya no se puede garantizar la eficiencia del servicio. A nivel local, las comunidades pueden tanto comprar los servicios de

las empresas de seguridad privada, como ingresar en una activa asociación con la policía local y el negocio de la defensa de la propiedad. Estas alianzas implican a una *comunidad activa* en una relación de asociación más igualitaria con las entidades estatales, que se manejan con niveles crecientes de autonomía local (ver O'Malley y Palmer, 1996).

Una importante característica final de la nueva gobernancia/soberanía es su naturaleza *eventual, contingente y fracturada*. En primer lugar, esto está relacionado con la privatización de la provisión. Los derechos sociales universales de la ciudadanía deben estar constantemente disponibles para todos. Estos derechos suponen cierta forma de esfera pública comunicativa, como base de su legitimación. Los ciudadanos que carecen de recursos, y pasan por épocas duras, no renuncian a estos derechos, los actualizan a través de sus reclamos a las autoridades adecuadas. Pero los clientes sólo obtienen aquello por lo que pagan y, si no pueden hacerlo, entonces dejan de ser clientes; los servicios y la seguridad privados sólo se proveerán a quienes paguen. Detrás de estos hechos, yace la circunstancia de que no es importante para el capital que todos los sectores de la clase obrera estén bien alimentados, educados y listos para el trabajo que requiere de cierta calificación mínima. La nueva división del trabajo se desarrolla mediante la provisión por parte del Estado de una red de seguridad mínima, ya sea a través de ayudas en los ingresos o del apoyo policial, pero se deberá pagar por un creciente número de necesidades elementales de todos los días. Si los residentes o los propietarios quieren un patrullaje o una vigilancia de 24 horas diarias, pueden contratar seguridad privada. La policía sólo acudiría ante la amenaza real de disturbios de considerable magnitud.

Por supuesto, los servicios se pueden ofrecer rápidamente a aquellas comunidades activas con las que se han establecido alianzas políticas, mientras que se puede dejar que los pobres, en todo menos en caso de extremas emergencias, se valgan por sí mismos. En tanto, se puede tratar con las poblaciones riesgosas en la me-

dida en que –y cuando– estallen los problemas. No hay necesidad de que todas las zonas de la ciudad reciban una efectiva acción policial; en verdad no existe la necesidad de un dominio continuo del espacio urbano. Estos hechos cambian la relación entre la acción estatal y los discursos concernientes a los derechos y a los valores morales. Esos discursos jurídicos y morales acerca de los derechos universales se ven desplazados por aquellos que hablan de la eficacia de la contención de los riesgos y de la irrupción de problemas. El desplazamiento en la dirección de la pluralidad y discontinuidad del poder se repite a escala global. Las zonas que no son esenciales para la acumulación de capital se pueden dejar degenerar en guetos o en áreas superpobladas y carenciadas de la ciudad, e incluso se puede hacer lo mismo con países enteros del Tercer Mundo, que son considerados como “entidades caóticas e ingobernables” (de Rivero, 1999). Existe una *remedievalización* del espacio (Kaplan, 1998), donde se defienden las zonas claves y las redes de comunicación, tal como en las ciudades amuralladas del medioevo, contra los “países bandidos” que las circundan. Estas áreas no coordinadas por el capital y sólo al cabo del tiempo por el Estado, son terreno fértil para formas alternativas de “gobernanza desde abajo” (Stenson, 1998, 1999), donde pueden proliferar la delincuencia, el terrorismo, la corrupción y la violencia.

Nuevamente, necesita enfatizarse la existencia de tendencias opuestas a una pura y simple política de manejo del riesgo. Incluso las poblaciones innecesarias para la acumulación del capital pueden tener aún poder político para presionar al Estado, o a la comunidad internacional, para encarar acciones reparadoras. Estas resistencias varían entre Estados y regiones. Donde la clase media y los pobres se entremezclan más, como en los países europeos occidentales, la presión es todavía mayor. El punto más importante es la disminuida capacidad del Estado o del capital privado para contener a la larga y de forma efectiva estas contradicciones.

LA IDENTIDAD Y LA AGRESIÓN

El área final donde impacta la destructiva autorreproducción del capitalismo es en el establecimiento de las bases para el crecimiento de las formas de identidad personal que legitiman la agresividad y los plazos cortos. En los Capítulos III y IV se comentó que un componente clave del desarrollo del capitalismo y de la aparición de las relaciones sociales del control del delito era la tendencia a la censura y a la no violencia, como características generales de las relaciones interpersonales (ver Elias, 1982, 1994). La violencia ejercida por el capital se vuelve institucional, burocratizada e instrumental –una “violencia sin pasión” (Collins, 1974), ejemplificada en la violencia crónica de las fuerzas armadas y las instancias estatales de represión, y en el cinismo de las corporaciones multinacionales que saquean el medio ambiente y empobrecen aún más a los desposeídos. Para las clases trabajadoras, la situación descrita por Engels (1847-1975) a comienzos del siglo XIX, fue reemplazada por salarios en alza, comunidades estables, y hábitos de trabajo y un consumo pasivo. La violencia individual y la agresión se convirtieron en aspectos disfuncionales, aberrantes y criminalizables.

Estas tendencias se reforzaron y consolidaron en la modernidad organizada del Estado de bienestar keynesiano. La vida social y la económica eran aspectos absolutamente predecibles, donde tenían sentido los proyectos a largo plazo. Las grandes empresas y los Gobiernos hacían inversiones masivas con vista a la maduración, en largos periodos y en condiciones de mercado predecibles (Galbraith, 1967). La vida social y la personal también se ajustaban a ciclos predecibles. Las elecciones se efectuaban en ciertos puntos claves del ciclo de la vida, tales como en qué especializarse en la Universidad y qué empleo tomar. Para los hombres, la subordinación de la propia identidad a la organización, era un proceso esencialmente similar para los de la clase obrera como para los de la clase media, para los hombres “fordistas” y

para los "hombres de la organización"; en tanto que para las mujeres, el mundo más restringido de la familia se determinaba una vez que se hubiese hecho la elección del esposo. Además del trabajo, la participación en la vida pública y comunitaria, el proceso esencialmente pasivo de votar, el involucramiento en sindicatos y otras actividades locales, el compartir los derechos del asistencialismo, y la relación con el Estado, como de cliente con experto, o como supervisor de un compromiso acerca de una agenda bastante restringida de necesidades monetarias, complementaban la orientación al consumo y la creciente afluencia del *boom* de la postguerra como fuente de conservadurismo, uniformidad y estabilidad de estas identidades. La formación de la identidad era un proceso de enlace con las comunidades, del cual derivaban el significado, la confianza y los estándares de la conducta ética. Éste era también un proceso que conectaba lo individual con el Estado y la sociedad civil.

La debilitación de las estructuras de la modernidad organizada ha creado nuevas dinámicas de formación de la identidad. La hegemonía del "capital impaciente", la inseguridad personal, la coordinación de la actividad económica por parte de las redes globales y el debilitamiento de las comunidades, han generado una separación entre la coordinación económica y la producción social de identidad. Entre otros filósofos, Hegel comprendió que la libertad y la propia identidad se asociaban con el reconocimiento, la aprobación, la confianza, etc., de los demás (ver Honneth, 1992, p. 169). El problema es que es difícil construir tales estructuras sobre la base de las lógicas desencontradas de las redes de la sociedad del capitalismo globalizado, que ha socavado los antiguos nexos de la comunidad, la sociedad, la política y el Estado-nación. Hoy en día, la formación de la identidad, de manera diferente a la de las "comunidades imaginadas" del nacionalismo moderno (Anderson, 1983) o a la de la clase política tradicional, está menos basada en los nexos con la sociedad civil y el Estado-nación. Los centros de poder no están donde se pueden formar las comunidades. Tal como lo nota Castells,

las redes de la sociedad se basan en el desencuentro sistemático que se da entre lo local y lo global para la mayoría de los individuos y los grupos sociales... Por lo tanto, una reflexiva planificación de vida se hace imposible, excepto para las élites que habitan el espacio sin tiempo de los flujos de las redes globales y para sus subordinados locales. Y la edificación de la intimidad sobre la base de la confianza, requiere de una redefinición de identidad completamente autónoma, frente a frente con la lógica de redes de las instituciones y las organizaciones dominantes (Castells, 1997, p. 11).

La búsqueda de una identidad estable se vuelve más imperiosa como modo de tratar con la incertidumbre individual, la inseguridad y el riesgo. Mientras que la sociedad de las redes globales en verdad muestra la posibilidad de nuevas formas de comunidades virtuales –basadas en internet– e identidades políticas de oposición, éstas están sólo en una etapa embrionaria. Entre tanto, la reconstrucción del sentido de comunidad *de cara a* las tendencias fragmentadoras del capital, se vuelve más difícil con la “ironía fundamental que la solidez de la identidad deteriora en proporción a su propia urgencia” (Young, 1999, 166).

Para los que cuentan con recursos, la élite, la pluralidad de identidades, la constante elección y la celebración de la *diferencia*, encajan fácilmente en la noción de sociedad postmoderna como ente móvil, fluido y constantemente reconstruido: una clase de mundo del *laissez-faire* (dejar hacer) de infinitas posibilidades, donde “la pluralización de la vida expande las potencialidades y las identidades disponibles para la gente común en su trabajo de todos los días, y en su vida social, familiar y sexual” (Hall, 1989, p. 129). Pero para los pobres, esta fluidez y la constante reestructuración de sus vidas, implica el movilizarse permanentemente entre las economías legales e ilegales de empleos de corto plazo, dando vueltas y “negociando”, arreglándose con las amenazas del corto plazo y las inestabilidades que se convierten en el personaje normal de la vida diaria.

De esta manera, la formación de la identidad está cada vez menos ligada a las restricciones y al aprendizaje de los patrones

morales comunitarios. El debilitamiento de lo social es, al mismo tiempo, el de la comunidad moral, lo que conduce a la declinación de la empatía y a la comprensión de los problemas de los demás como algo generado socialmente, más que como el resultado del fracaso individual. No existe "ninguna narrativa compartida acerca de la dificultad y, por lo tanto, ningún destino compartido" (Sennet, 1998: 147). El creciente apoyo por lo punitivo como opuesto a las respuestas del asistencialismo a los problemas sociales, refleja, a su vez, una orientación hacia el corto plazo, hacia las cambiantes contingencias de la vida, en lugar de los compromisos con los demás. De esta forma,

es sabio y prudente no hacer planes a largo plazo o invertir en un futuro distante; no atarse demasiado firmemente a algún lugar, grupo o causa en particular, incluso a la imagen propia, porque uno se podría encontrar no sólo desanclado y a la deriva, sino también sin ancla... En otras palabras, "ser previsor" hoy significa, con bastante frecuencia, evitar los *compromisos*. Estar libre para moverse cuando la oportunidad golpee a la puerta. Estar libre para partir cuando ésta deja de golpear (Bauman, 1994, p. 12).

O como el gángster personificado por Robert de Niro le aconseja a su joven cómplice en la película *Calor (Heat)*, "No te metas en ninguna relación de la que no puedas salir en 30 segundos." El estilo de vida inseguro de los gángsters migra del bajo mundo al mundo superior. En este contexto, las antiguas estructuras de restricción y socialización, cruciales en anteriores arreglos de gobernancia para la socialización y la integración, se pueden ahora eliminar como impedimentos redundantes, o incluso autocriticarse como formas de violencia. Nuevamente, Bauman sostiene que:

Los matrimonios, las familias, la paternidad, los vecindarios y los lugares de trabajo han perdido gran parte de su papel de avanzada frontera de la fábrica de orden manejada socialmente. La coerción aplicada allí, de hecho y diariamente pierde su función como vehículo de

“la ley y el orden” y, por lo tanto, puede ser desafiada como elemento de violencia gratuita y de imperdonable crueldad. Las que una vez fueron jerarquías indiscutidas, se pueden desafiar nuevamente, los habituales patrones de relaciones se pueden renegociar, los antiguos derechos coercitivos y la demanda de disciplina se pueden cuestionar y resistir de manera violenta –de modo que la impresión general que se crea es que la suma total de la violencia está en alza, mientras que el ejercicio del poder supremo, que antes era acatado o simplemente pasaba desapercibido, ahora está siendo reclasificado como violencia ilegítima (Bauman, 1995, p. 156).

La creciente lucha por destacarse en un mundo incierto y competitivo, cuando las antiguas certezas, el estatus de una carrera y la comunidad han sido erosionados, aumenta el recurso de la agresión, a menudo como el único aspecto que permite que el individuo atraiga la atención o altere situaciones. De esta forma, “el *cogito* de Descartes se ha reestructurado como ‘Se me presta atención, por lo tanto existo’ (y para propósitos prácticos expresado como ‘Grito, por lo tanto existo’)” (Bauman, 1995, p. 157). El papel de la “violencia expresiva” y de la masculinidad agresiva, anteriormente pensada como un fenómeno subcultural asociado con los intentos del hombre joven por expresar identidad y producir respeto en las comunidades pobres y marginadas (Cloward y Ohlin, 1960), se está volviendo ahora una forma de conducta más ampliamente generalizada; parte del individualismo agresivo que resurge. Esto es menos disfuncional para el proceso de lo que podría llegar a pensarse. La histórica declinación de la agresividad a favor de la restricción, las recompensas diferidas y la ubicación de la violencia, ya sea en las subculturas delictivas, como en las burocracias institucionales, están siendo socavadas. La gobernanza es menos segura en la integración a largo plazo de los individuos en el complejo de las organizaciones y los contratos sociales, y está más caracterizada por los emplazamientos a corto plazo, el oportunismo, la inseguridad y la competitividad, en tanto que la coordinación general del sistema yace cada vez

más en los mercados y las redes de comunicación, en lugar de hacerlo en la cohesión *social*.

Este intento de construcción de identidad implica un constante y cambiante bricolaje de elementos extraídos de los medios masivos de comunicación globales, de la etnicidad y de la religión. Cierta parte es muy innovadora, pero una buena parte está dominada por la superficialidad, la pérdida de historicidad en favor del canibalismo del pasado, y la pérdida de significado y de la dominación de las tecnologías reproductivas (Jameson, 1984). Esta negativa libertad de la constante autorrecreación es contradictoria. Se predica la disolución del mundo de vida social como fuente de reconocimiento y afirmación de la identidad individual estable; pero incapaz de conseguir cualquier tipo de estabilidad, esto continuamente choca con su opuesto: la nostalgia por la comunidad, representada frecuentemente por el renacimiento conservador y los intentos de reapropiación del lenguaje de anteriores etapas de la modernidad. Éstas incluyen las formas de autoritarismo étnico y de reacción religiosa, y varían desde la nostalgia pacífica por el comunitarismo (Etzioni, 1993), hasta la violenta nostalgia de la extrema derecha por una comunidad étnica visible y claramente definida, que intenta asegurar el reconocimiento mediante la exclusión forzada de la ambigüedad y la diversidad, en lugar de encontrar en ellas nuevos recursos para la comunidad y el reconocimiento mutuo. Este violento autoritarismo responde al proceso de exclusión social mediante el simple intento de reemplazar al capital como el elemento excluyente.

Debería evitarse cualquier noción que considere que la clase trabajadora o los pobres socialmente excluidos son los únicos depositarios de tales intentos violentos por recrear a la comunidad y la identidad personal. En verdad, la imagen del marido violento, la "masculinidad sin ley" de la juventud de las grandes concentraciones urbanas marginadas (Campbell, 1993) o de los vigilantes fascistas, son todas de la clase trabajadora. Pero en gran medida esto sucede porque la noción de identidad violenta es operada en tales términos. Como han señalado las feministas, la

violencia doméstica no es una característica exclusiva de los pobres, sino que se puede encontrar en todas las clases sociales (Mooney, 2000). Incluso el acuerdo entre muchos comentaristas sociales sigue siendo el de localizar las fuentes de agresión en aquellos que de algún modo se han desviado, o se han desconectado de la corriente principal de la sociedad. La antigua tradición de la patología residual, o de la cultura de la pobreza, de los pobres como un obstáculo autogenerado para la integración a la modernidad, se reproduce ahora en una nueva forma. Para ciertos conservadores, el espectro del temor reside en la creencia de que las patologías que antes eran exclusivas de la *underclass* más o menos permanentemente desempleada, amenazan ahora con contaminar a las clases normales.

De este modo Charles Murray, el conservador estadounidense, habla de "derrame cultural", y pregunta "¿Cuánto ha ya derramado la cultura de la *underclass* sobre la corriente de la opinión pública?" En su opinión:

la mayoría de los disturbios son la expandida expresión, a menudo aprobatoria, de la ética de la clase marginal: toma lo que quieras. Responde de manera violenta a cualquiera que antagonice contigo. Desdena la cortesía por ser elemento de debilidad. Siéntete orgulloso de hacer trampas (hurtar, mentir, explotar) de manera exitosa. Yo no sé cómo medir cuán ampliamente se han difundido estos principios, pero es difícil negar que ahora se exponen más abiertamente en la televisión, las películas y las grabaciones, de lo que antes solía hacerse. Estoy sugiriendo que entre las varias explicaciones de este deterioro, está implicado el derrame cultural de la *underclass* (Murray, 1999).

Murray no es ajeno a algunas de las objeciones a su tesis, pero, sin embargo, persiste:

No debería dejar de decirse que la vulgaridad, la violencia, y el resto eran parte de la corriente principal de la sociedad antes de la aparición de la clase marginal. Pero estas cosas siempre solían ser condenadas en los discursos públicos. Ahora no lo son. No se trata solamente de

que los Estados Unidos hayan estado circunscribiendo la desviación hacia abajo, relajando los antiguos códigos morales; la vida callejera de las barriadas populosas y marginales de las ciudades ha aportado un código alternativo, y éste está atrayendo neófitos (Murray, 1999).

Pero ésa es precisamente la cuestión. La falta de condena de la vulgaridad y de la violencia apenas podría deberse a los grupos pobres y marginados, quienes tienen muy poca influencia sobre los medios masivos de comunicación o sobre el "discurso público". El hecho, en cambio, es que tales valores se generan en el centro de un capitalismo cada vez más dañino. Los pobres y marginados reproducen e innovan sobre la base de los valores dominantes y los medios de lograrlos: reproducen otra variedad de ellos. La "masculinidad sin ley" de la juventud revoltosa presente en el estudio de Beatrix Campbell (1993) acerca de las vecindades más necesitadas del noreste de Inglaterra durante principios de la década de 1990, no es una cultura marcadamente diferente de la de los salones financieros del centro bancario de Londres. Por cierto, algunos de los ejemplos más evidentes que podemos ver acerca de la cultura de la "masculinidad sin ley" se encuentran en el gran papel del capital financiero.

Durante la década de 1980, el centro financiero de Londres y otros más alrededor del mundo, presenciaron el avance de un nuevo capital financiero, especulativo, móvil y globalizado, al que anteriormente me referí como "capital ficticio", el cual destacó una nueva raza de operadores. De este modo, "los hombres de las empresas no eran los principales beneficiarios, sino los banqueros y los operadores de las transacciones... que pasaban el día vociferando y jurando, mientras movían millones en transacciones alrededor de todo el mundo" (Sampson 1995, p. 151). En una visión polémica acerca de las nuevas fuerzas que operan en el mundo de las finanzas, Christopher Stanley trazó brillantemente las similitudes entre la nueva cultura agresiva de la clase financiera y la de la clase marginada, en la comparación entre el centro financiero y las zonas populosas y necesitadas del este de Londres, donde

el territorio puede ser diferente, pero las tensiones y los procesos consiguientes de fragmentación acerca del cambio económico y político son muy similares. La subcultura previamente estable (mitológica) generó una serie de códigos de conducta. La fragmentación de esta estabilidad cultural ha acentuado los contornos entre la cultura normativa previamente generada y las nuevas formas de comportamiento violento y arbitrario. Las antiguas formas de prácticas consuetudinarias (tradicionalmente "el ambular y negociar, zambullirse y bucear") se han erosionado, dada la invasión de formas más violentas de conducta empresarial-delictiva, bajo la forma de transacciones relacionadas con las drogas. La violencia de las calles de *East End* (suburbio londinense) puede ser más "real" en el sentido de un creciente temor físico, pero sólo es una sombra de la violencia "simbólica" desplegada en los salones del centro financiero londinense (Stanley, 1996, p. 72).

Mientras tanto, la masculinidad agresiva de los salones financieros es considerablemente más seria que aquella de las vecindades marginadas y socialmente excluidas; al menos estas últimas siguen siendo reconocidas como un problema, y los Gobiernos aún intentan encontrar medios para canalizar a los jóvenes hacia actividades más constructivas. De forma más importante, en las comunidades más pobres, este individualismo agresivo es al menos atemperado por la solidaridad colectiva y por la resistencia de la necesidad de sobrevivir. La agresión de los ricos, caracterizada por su "anomia de riqueza" (Simon y Gagnon, 1976) conduce, sin tener en cuenta un ocasional puñetazo en alguna barra de licores del centro bancario londinense, a una violencia física menos abierta, pero es sintomática de un sistema socioeconómico encerrado en una autorreproducción destructiva.

CONCLUSIÓN

En este capítulo, me he enfocado en varios rasgos del capitalismo en su fase de reproducción destructiva. La socialización y la homogeneización se reemplazan por la polarización y la frag-

mentación sociales. El Estado de bienestar y el compromiso político entre las clases sociales, que actúan como mecanismos estabilizadores, son reemplazados por el poder directo de la propiedad privada y los mecanismos de mercado, convirtiendo al ciudadano en consumidor. El Estado se vuelve más autoritario en su sustitución de la política social por la seguridad y el manejo del riesgo, a la vez que se debilita debido al poder global del capital privado y el desmoronamiento del proceso político. Como consecuencia importante de esto último, se produce el debilitamiento de la esfera pública o social de la política, como forma de negociación y compromiso entre las clases sociales y otros grupos, y también como terreno de generación e implementación de políticas. La comunicación pública se vuelve cada vez más una forma de cinismo, ofuscación y parloteo de descontento. Nos queda ahora trasladarnos a la consideración de cierta parte del impacto de estos sucesos sobre la delincuencia y su control.